

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/WGTCP/W/130
12 de julio de 1999

(99-2877)

**Grupo de Trabajo sobre la Interacción entre
Comercio y Política de Competencia**

Original: inglés

COMUNICACIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS

Se ha recibido de la Delegación Permanente de la Comisión Europea la siguiente comunicación, de fecha 1º de junio de 1999, con el ruego de que se distribuya a los Miembros.

Contribución de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio internacional

El sistema de la OMC ha hecho una contribución importante a la promoción de la competencia en todo el mundo. Esto se ha logrado, primordialmente, mediante negociaciones encaminadas a la reducción progresiva de los obstáculos gubernamentales al comercio y el establecimiento de un marco vinculante de normas aplicables a diferentes tipos de medidas gubernamentales que repercuten en el comercio internacional. En el contexto de una nueva ronda de negociaciones comerciales, cabe esperar que se realicen mayores progresos en la liberalización de obstáculos al comercio que afectan a la agricultura, los servicios y la industria. El Consejo General está en vías de definir un programa para una nueva ronda de negociaciones, que deberá ser de base amplia y responder de manera equilibrada a las expectativas de los Miembros de la OMC. Los intereses particulares de los países en desarrollo deberán ser parte integrante de ese programa para una nueva ronda. En ese contexto, habrá que tener en cuenta también la posibilidad de efectuar mejoras, sobre la base de las propuestas de los Miembros, al marco en el que actualmente se inscriben las normas de la OMC.

Sin embargo, en la actualidad no existe un marco multilateral en lo relativo a la aplicación de una legislación sobre competencia a las prácticas anticompetitivas de las empresas, que también pueden tener una repercusión significativa en el acceso a un mercado. En varios Acuerdos de la OMC, sobre todo en el sector de los servicios, se han incluido disciplinas relacionadas con la competencia, pero es necesario examinar un método más horizontal. Del mismo modo, las cuestiones relacionadas con la competencia sólo se pueden abordar de manera apropiada en el marco de la OMC sobre la base de negociaciones en las que se establezca el alcance adecuado de los compromisos contraídos por los Miembros de la OMC. Resulta evidente, por ejemplo, que los recursos de la OMC para casos en que no existe infracción no son el medio apropiado para ocuparse de la relación entre la legislación en materia de competencia y el acceso a los mercados.¹ Menos conveniente aún sería ocuparse unilateralmente de estas cuestiones fuera del contexto de la aplicación atinada de disciplinas comúnmente acordadas relativas a las leyes de competencia.

¹ A raíz del caso Kodak-Fuji, parece que, con arreglo al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, cabe plantear una reclamación en los casos en que no existe infracción si se puede establecer que el gobierno apoya una práctica anticompetitiva.

La necesidad de abordar la legislación sobre competencia desde un plano multilateral se ve reforzada aún más por la mundialización de las actividades comerciales y por el gran aumento del número de países que han adoptado un ordenamiento al respecto. La cooperación se ha convertido en un factor esencial para promover la aplicación efectiva de las leyes de competencia de manera que se eviten los conflictos de jurisdicción. La cooperación no deberá limitarse a los países de la OCDE ni a los países que han concertado acuerdos bilaterales. Se requiere, por lo tanto, un marco de cooperación que pueda satisfacer las necesidades de los países en diferentes etapas de desarrollo. De hecho, los países en desarrollo han insistido tradicionalmente en la necesidad de una cooperación de esa índole que respalde sus esfuerzos encaminados a lograr la aplicación efectiva de su ordenamiento interno en materia de competencia. Un marco multilateral de normas y principios, dentro de la OMC, deberá asegurar que esa cooperación se podrá sustentar realmente. Contribuirá además a la difusión de una "cultura de la competencia" y a una reducción de los gastos innecesarios que para los empresarios entraña la aplicación de diferentes leyes de competencia a las mismas transacciones internacionales.

Por las razones expuestas anteriormente, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, junto con otros Miembros de la OMC en todos los niveles de desarrollo, han argumentado en favor de la elaboración, dentro de la OMC, de un marco multilateral de normas relativas a la legislación y la política de competencia. Dentro del contexto de un programa general y equilibrado para una nueva ronda, somos partidarios de un marco básico de principios y normas vinculantes relativas a la legislación y la política en materia de competencia desde el punto de vista de su relación con las prácticas anticompetitivas cuya repercusión en el comercio y las inversiones internacionales sea importante. Como parte del proceso preparatorio de la Conferencia Ministerial de Seattle, el Consejo General examina las decisiones relativas a la conveniencia de iniciar negociaciones al respecto. La presente nota tiene la finalidad de compartir ideas con los Miembros de la OMC sobre la manera en que un marco multilateral de normas relativas a la legislación y la política de competencia puede contribuir al logro de los objetivos de la OMC. En este sentido, nos ocuparemos, en particular, de dos cuestiones: a) la manera en que los diferentes elementos que cabe considerar dentro de ese marco pueden contribuir al logro del objetivo de promover el comercio internacional; y b) la manera en que la dimensión del desarrollo puede integrarse en un marco multilateral sobre competencia.

I. CONTRIBUCIÓN DE UN MARCO MULTILATERAL SOBRE COMPETENCIA A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Las deliberaciones en el Grupo de Trabajo han contribuido en gran medida a comprender mejor la importancia de disciplinas sobre la política de competencia efectiva para sostener el proceso de liberalización del comercio. De esas deliberaciones surgen tres aspectos que merecen mencionarse en particular: a) la legislación y la política de competencia desempeñan una función esencial al velar por que los beneficios de la liberalización del comercio y de las inversiones no sean anulados por las prácticas anticompetitivas de las empresas; b) las prácticas anticompetitivas adquieren una dimensión internacional cada día mayor. Una práctica anticompetitiva puede tener efectos en el comercio internacional cuando cierra el acceso a un mercado, repercute en varias jurisdicciones o se concibe en un mercado diferente de aquel en que se aplica; y c) aunque hay importantes diferencias en los marcos jurídicos e institucionales nacionales, existe también un grado muy amplio de convergencia con respecto a los factores esenciales de la legislación y la política sobre competencia. Esto tiene que ver con los planteamientos básicos que se adoptan en lo relativo a las prácticas anticompetitivas con una repercusión importante en el comercio y las inversiones internacionales y también con los principios fundamentales, como la transparencia y la no discriminación, que deberán orientar la aplicación de las leyes de competencia.

Con el objeto de potenciar la contribución de la legislación y la política de competencia a la promoción del comercio internacional, parece que conviene seguir, por consiguiente, un método flexible en lo tocante al desarrollo de principios y normas de la OMC. Queda claro que la OMC no debería adquirir facultades de investigación y aplicación en lo relativo a prácticas anticompetitivas privadas: ésta es una cuestión que conviene más dejar a las autoridades nacionales responsables de la

competencia. Tampoco sería apropiado prever una armonización amplia de la legislación sustantiva en materia de competencia o de los entornos jurídicos e institucionales nacionales. La Comunidad Europea y sus Estados miembros, así como otros Miembros de la OMC, han argumentado más bien en favor de un acuerdo marco básico sobre competencia en el que se reconocieran plenamente las diferencias en los entornos jurídicos e institucionales nacionales, como también en los niveles de desarrollo. Un marco multilateral sobre competencia estaría basado en un compromiso de los Miembros de la OMC de adoptar y aplicar un ordenamiento interno en materia de competencia sustentado en principios y normas comúnmente aceptados. Entre los elementos que podrían examinarse en este sentido figuran los siguientes: a) principios y normas fundamentales en materia de legislación sobre competencia y su aplicación, que podrían incorporarse en el ordenamiento interno de los Miembros de la OMC; b) las prácticas anticompetitivas con una repercusión significativa en el comercio y las inversiones internacionales como objetivo específico; y c) modalidades de la cooperación internacional.

En otras comunicaciones dirigidas al Grupo de Trabajo, la Comunidad Europea y sus Estados miembros han expuesto ideas relacionadas con cada uno de los tres elementos enumerados más arriba. También nos han resultado sumamente beneficiosas las ideas y las observaciones que los miembros de este Grupo de Trabajo han formulado tanto por escrito como oralmente. Como una aportación a nuestros debates, quisiéramos compartir algunas consideraciones básicas sobre la manera en que cada uno de estos elementos podría contribuir al fomento del objetivo de la OMC referente a la promoción del comercio internacional.

A. PRINCIPIOS Y NORMAS FUNDAMENTALES EN MATERIA DE LEGISLACIÓN Y POLÍTICA SOBRE COMPETENCIA

En el Grupo de Trabajo se ha expresado un gran interés en la aplicación, a la legislación y la política sobre competencia, de principios y normas fundamentales basados en la transparencia y la no discriminación. La cuestión no es una transposición mecánica de las normas existentes de la OMC, sino que se trata más bien de estudiar la manera en que esos principios se podrían adaptar a un marco de competencia, de forma tal que se potenciara la contribución de la legislación y la política sobre competencia a la promoción del comercio internacional. Los principios y normas comúnmente acordados se incorporarían a la legislación nacional y, por consiguiente, no representarían una capa adicional de normas con respecto a las leyes nacionales sobre competencia. En su comunicación presentada en la última reunión del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/W/115), la Comunidad Europea y sus Estados miembros sugirieron algunas cuestiones que habría que examinar más a fondo al elaborar tales principios. Las observaciones que siguen tienen la finalidad de poner de relieve el motivo por el que los principios de no discriminación y transparencia son esenciales para lograr una aplicación efectiva de la legislación sobre competencia como también para potenciar su contribución a la promoción de los objetivos de la OMC.

El principio de no discriminación es un elemento modular de la aplicación de la legislación sobre competencia y es generalmente reconocido en el ordenamiento de los Miembros de la OMC. El principio guarda una estrecha relación con el objetivo de la OMC de promover la igualdad de oportunidades competitivas para todas las empresas que funcionen en un mercado. Ello apunta a que sería muy ventajoso confirmar este principio en el plano multilateral. Al mismo tiempo, las mejores garantías para lograr una aplicación efectiva del principio radicarían, por ejemplo, en: a) asegurarse de que hubiera un régimen jurídico interno sobre competencia que abarcara las prácticas anticompetitivas clave y que estuviera respaldado por una estructura de aplicación efectiva y transparente; b) limitar, de manera progresiva, las posibilidades de exclusiones de la aplicación de la legislación sobre competencia; y c) reconocer explícitamente la función de defensa de las autoridades responsables de la competencia en relación con diferentes formas de intervención gubernamental.

Existe una íntima relación entre los principios de transparencia y no discriminación. Pese a las diferencias que pueda haber en los entornos jurídicos e institucionales, en todos los regímenes jurídicos sobre competencia se han incorporado garantías de transparencia para lograr una certidumbre jurídica y promover la sensibilización de empresas y consumidores. Tanto desde el punto de vista del marco jurídico como de los procedimientos de aplicación, la transparencia es la mejor garantía de una aplicación no discriminatoria de la legislación sobre competencia. Brinda a las empresas la oportunidad de plantear, a nivel nacional, sus preocupaciones con respecto a prácticas anticompetitivas, además de que ofrece seguridades de un "procedimiento reglamentario". Así pues, cabe la posibilidad de considerar un acuerdo multilateral en torno a las disposiciones en materia de transparencia como una contribución clave al reforzamiento de la legislación sobre competencia, como también al examen de las preocupaciones a que pueda dar lugar la repercusión de las prácticas anticompetitivas en el comercio internacional.

B. LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS CON UNA REPERCUSIÓN IMPORTANTE EN EL COMERCIO Y LAS INVERSIONES INTERNACIONALES COMO OBJETIVO DE LA OMC

En el marco de la OMC, es necesario centrar la atención en las prácticas anticompetitivas que tengan una repercusión significativa en el comercio y las inversiones internacionales. Para el análisis realizado en el Grupo de Trabajo ha resultado beneficiosa la gran cantidad de ejemplos que se han presentado acerca de la manera en que diferentes tipos de prácticas anticompetitivas pueden tener una repercusión desfavorable en los objetivos de la OMC relativos a la apertura de los mercados. Hay además un alto grado de entendimiento común con respecto a una tipología para el análisis de esas prácticas, en el que se destacan tres tipos de situaciones: a) una práctica anticompetitiva que cierra el acceso de bienes, servicios o inversiones al mercado de un tercer país (por ejemplo, cárteles de importación, determinados acuerdos verticales o abusos de una posición dominante); b) una práctica anticompetitiva que tiene repercusiones en varios mercados (por ejemplo, cárteles internacionales, fusiones multijurisdiccionales); y c) una práctica anticompetitiva cuyo efecto se siente primordialmente en un mercado diferente de aquel en el que fue concebida. (Un ejemplo típico sería el de los cárteles de exportación, aunque también pueden corresponder a esta categoría determinadas fusiones o abusos de una posición dominante.)

La OMC podría centrarse en explorar las posibilidades de elaborar métodos comunes para enfrentar más eficazmente los tipos de prácticas competitivas a que se ha hecho referencia. En nuestra comunicación dirigida al Grupo de Trabajo en marzo de 1998 (WT/WGTCP/W/62), expusimos algunas ideas sobre la manera en que podría proseguirse este trabajo. Una vez más, el objetivo no sería lograr una armonización de la legislación sustantiva en materia de competencia. Deberíamos explorar, en cambio, una variedad de opciones -incluidas normas comunes en lo relativo a los cárteles, criterios comunes de evaluación por lo que respecta a otras prácticas que suponen el cierre del acceso a un mercado y principios para fomentar la cooperación en lo relativo a las fusiones multijurisdiccionales y los cárteles de exportación- que pueden modularse con el objeto de tener en cuenta el grado de una posible convergencia. En todos los casos, la labor debería centrarse en las prácticas que tuvieran una repercusión significativa en el comercio y las inversiones internacionales. Las leyes nacionales sobre competencia resultan aplicables independientemente de la posibilidad de que una práctica anticompetitiva tenga una repercusión en el comercio internacional. Las disciplinas de la OMC se centrarían únicamente en aquellos casos en que una práctica anticompetitiva fuera de dimensión internacional, de manera que no habría necesidad de ocuparse de prácticas anticompetitivas de un carácter puramente interno.

Se podría asignar una prioridad particular a los denominados "cárteles intrínsecamente nocivos", que son acuerdos entre competidores reales o potenciales que entrañan fijaciones de precios, licitaciones fraudulentas, restricciones a la producción o asignación de ésta y división del mercado. Estos acuerdos horizontales tienen un efecto claro de distorsión del comercio y se consideran una grave infracción de la mayoría de los regímenes jurídicos sobre competencia. Parece, por lo tanto,

que hay un interés particular en tratar de establecer una norma común en esta esfera y en fomentar la cooperación internacional para lograr una aplicación efectiva.

Con respecto a otras prácticas anticompetitivas que pueden cerrar el acceso a un mercado (es decir, determinados acuerdos verticales o abusos de una posición dominante), las autoridades responsables de la competencia deben efectuar una evaluación de la situación en un mercado. Una norma común que prohibiera determinados tipos de prácticas podría parecer, por consiguiente, demasiado rigurosa. En cambio, sería positivo estudiar más a fondo la posibilidad de elaborar criterios comunes para evaluar si determinadas prácticas restringen la competencia y tienen un efecto negativo en el acceso a un mercado. Es evidente que para esta labor se necesitaría un mayor intercambio de opiniones sobre la manera en que se consideran estas prácticas en el marco de diferentes regímenes jurídicos nacionales en materia de competencia. La ventaja principal de un planteamiento común en esta esfera es que fomentaría la transparencia y reduciría las posibilidades de discrepancias acerca de la repercusión, en el comercio internacional, de tales prácticas anticompetitivas. Sobra decir que los criterios comunes que se lleguen a elaborar sólo podrán basarse en un análisis racional de la legislación sobre competencia.

El fomento de la cooperación internacional deberá ser un objetivo clave en lo relativo a los cárteles de exportación y a las fusiones multijurisdiccionales. Las autoridades responsables de la competencia en el país importador tal vez encaren problemas particulares al aplicar su legislación sobre competencia a los cárteles de exportación. Por motivos de jurisdicción, la aplicación de la legislación de competencia del país exportador no es por fuerza la solución apropiada en todos los casos. Debe haber, no obstante, una cooperación efectiva entre las autoridades responsables de la competencia de manera que se logre una mejor aplicación de la legislación en la materia en lo referente a los cárteles de exportación. En relación con las fusiones, convendría examinar principios relativos a su control con la finalidad de promover la convergencia de los requisitos de procedimiento y de una mayor cooperación en lo relativo a las fusiones que abarcan diferentes jurisdicciones.

C. MODALIDADES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En otra contribución distinta a este Grupo de Trabajo, la Comunidad Europea y sus Estados miembros han expuesto ideas acerca de la aportación de la OMC a una mayor cooperación en lo que respecta a la legislación sobre competencia y su interacción con el comercio. Muchos Miembros de la OMC han subrayado que las modalidades de la cooperación internacional deben ser un elemento clave de cualquier acuerdo de la OMC sobre competencia. Con la finalidad de asegurarse de que la cooperación es efectiva y que puede sostenerse, deberá estar basada en un marco común de normas y principios acordados a nivel multilateral. Las modalidades que se establezcan deberán ser lo suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades de los países en diferentes niveles de desarrollo.

La Comunidad Europea y sus Estados miembros están convencidos de que, en una economía mundial globalizada, la legislación y la política sobre competencia afectan a los intereses de todos los países. La cooperación no puede quedar limitada a los países que hayan decidido concertar acuerdos bilaterales o al marco de cooperación que se haya establecido entre los países de la OCDE. Los acuerdos bilaterales desempeñan una función importante para fomentar una cooperación estrecha en las actividades referentes a la aplicación. Al mismo tiempo, como se ha señalado en el Grupo de Trabajo, en las etapas iniciales de elaboración de la legislación en materia de competencia es probable que los países carezcan de recursos para concertar acuerdos bilaterales. Sin embargo, esto no debe interpretarse en el sentido de que los países de que se trata no se han de beneficiar de las modalidades de la cooperación internacional. Además, existe el riesgo de que si la cooperación se produce exclusivamente a nivel bilateral, se puedan descuidar los intereses de los países que no sean parte en acuerdos de esa índole. Por otro lado, un marco multilateral de cooperación podría apoyar y servir de complemento a la elaboración progresiva de acuerdos bilaterales.

Resulta, por lo tanto, muy positiva la formulación, dentro de la OMC, de modalidades de cooperación internacional encaminadas al logro de dos objetivos:

- a) La cooperación en apoyo del reforzamiento progresivo del marco jurídico nacional sobre competencia, incluida una asistencia técnica mayor y mejor coordinada:

Algunos países en desarrollo Miembros de la OMC han expuesto ideas importantes a este respecto. Puede tratarse, por ejemplo, de un marco para facilitar el intercambio de experiencias e información sobre la legislación en materia de competencia y su aplicación, exámenes voluntarios por funcionarios de igual nivel y la posible presentación de informes periódicos sobre tendencias mundiales en la esfera de la legislación y la política de competencia. Estimamos que estas sugerencias son muy positivas y que podrían ser de gran valor para todos los Miembros de la OMC. En rigor, contribuirían al reforzamiento de la capacidad nacional y a la difusión de una cultura de la competencia. El Grupo también se ha beneficiado de las exposiciones que algunas organizaciones internacionales, como la UNCTAD, el Banco Mundial y la OCDE, han hecho en torno a sus actividades de asistencia técnica en curso en la esfera de la competencia. Un marco multilateral relativo a la competencia contribuiría a otorgar una mayor prioridad a ese tipo de asistencia y a fomentar un método coordinado entre todas las instituciones competentes en una asociación plena con los países en desarrollo.

- b) La cooperación en lo relativo a asuntos que afectan a los intereses de varios Miembros de la OMC:

Las prácticas anticompetitivas que repercuten en el comercio y las inversiones internacionales afectan a los intereses de varios países. De ahí que sea esencial establecer una cooperación para enfrentar esas prácticas de manera más eficaz. Se han diseñado modalidades flexibles de cooperación, por ejemplo, en el marco de la OCDE o de determinados acuerdos bilaterales. Sin embargo, no hay razón para que los países en desarrollo no se beneficien de las modalidades de la cooperación internacional. De hecho, muchos países en desarrollo han subrayado la importancia de esa cooperación para respaldar sus esfuerzos encaminados a aplicar su ordenamiento interno en la esfera de la competencia. La cooperación podría abarcar elementos como la notificación, las consultas y el intercambio de información no confidencial. También se podría abordar la cuestión de la cortesía internacional positiva en un acuerdo multilateral, pero no debería haber una obligación vinculante de investigar en nombre de un tercer país.

Una vez que perciba con mayor claridad el alcance de los compromisos que se habrán de contraer en el marco de un acuerdo de la OMC, será necesario examinar más a fondo las modalidades de la solución de diferencias de modo que se adapten bien a las características específicas de una legislación sobre competencia. En cualquier caso, no deberá haber un reexamen de decisiones individuales adoptadas en materia de solución de diferencias.

II. LA DIMENSIÓN DEL DESARROLLO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE UN MARCO MULTILATERAL SOBRE LA COMPETENCIA

La dimensión del desarrollo ha sido un elemento integrante y esencial de las deliberaciones sostenidas en el Grupo de Trabajo. En el documento de síntesis elaborado por la Secretaría al respecto (WT/WGTCP/W/80), y en el informe del Grupo de Trabajo se pone de manifiesto la importancia atribuida a la relación de la política comercial y la política de competencia con el desarrollo y el crecimiento económico. El gran número de contribuciones que países en desarrollo Miembros de la OMC han efectuado tanto oralmente como por escrito son una muestra clara de que la aportación de la legislación y la política de competencia al desarrollo tiene que ser un elemento medular de examen en la OMC. En realidad, los países en desarrollo han otorgado tradicionalmente una gran prioridad a la mejora de la cooperación internacional en lo relativo a las prácticas

anticompetitivas. De las deliberaciones parece desprenderse que actualmente existen grandes posibilidades de ocuparse de esta cuestión sobre la base del interés común.

Un punto importante que se deriva de los debates del Grupo de Trabajo es que, en el contexto de una economía mundial globalizada, habrá que considerar que la política de competencia es un instrumento para el desarrollo. En este sentido, se ha señalado que la introducción o reforzamiento de un ordenamiento interno sobre competencia ha sido un elemento clave de las reformas nacionales destinadas a fomentar la competencia y la integración efectivas en una economía mundial globalizada. Se considera que las disciplinas efectivas en materia de competencia son parte de un conjunto de políticas que abarca también las reformas en lo referente a la liberalización y reglamentación del comercio y las inversiones. Muchos delegados han subrayado asimismo la importancia de un marco jurídico claro y de obligado cumplimiento y del establecimiento de una autoridad responsable de la competencia con facultades bien definidas.

Al mismo tiempo, se ha señalado que las autoridades responsables de la competencia en los países en desarrollo encaran desafíos difíciles. En la primera etapa, es necesario definir una ley nacional de competencia que se adapte bien a la capacidad institucional del país. Después de la introducción de una ley, se precisa establecer con claridad la función de las autoridades responsables de la competencia y reforzar progresivamente su papel en los ámbitos de aplicación y defensa. Ello entraña establecer un orden de prioridad en la esfera de la aplicación y encarar los puntos débiles institucionales que quizá se traduzcan en una inversión insuficiente. La cooperación puede desempeñar una función importante en cada una de estas etapas.

La Comunidad Europea y sus Estados miembros consideran que la dimensión del desarrollo también debe ser un factor medular del examen de un marco multilateral de normas sobre competencia en la OMC. Estamos dispuestos a debatir y a examinar favorablemente las ideas que los países en desarrollo expongan en torno a la manera de integrar los intereses y preocupaciones relacionados con el desarrollo en cualquier marco futuro de normas sobre competencia dentro de la OMC. En la etapa actual, y habida cuenta de los elementos que se han señalado a la atención del Grupo de Trabajo, deseamos compartir algunas ideas preliminares sobre la manera en que las consideraciones relativas al desarrollo podrían quedar plenamente integradas en un marco de normas:

Progresividad: Los compromisos relativos a la introducción de una ley sobre competencia deberían ser de carácter progresivo de manera que se tuvieran en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo. La progresividad también podría ser de aplicación en lo referente a las limitaciones a las exclusiones sectoriales de la aplicación de la legislación sobre competencia. Además, cuando se analicen los principios y normas comunes referentes a la aplicación de la legislación sobre competencia, deberán tomarse en consideración los factores que restringen la capacidad de los países en diferentes niveles de desarrollo. Pudiera suceder, por ejemplo, que los países en las primeras etapas de desarrollo sólo estuvieran en condiciones de introducir determinados compromisos referentes a la administración de una ley de competencia de manera progresiva.

Flexibilidad: Como ya se ha indicado, la finalidad de un marco multilateral sobre competencia no deberá ser una armonización amplia de la legislación sobre competencia, sino que habrá de tener plenamente en cuenta las diferencias en los entornos jurídico e institucional. La flexibilidad sería entonces un elemento incorporado de las normas o principios comunes que se definieran a nivel multilateral. Se pueden citar dos ejemplos para ilustrar este punto. Varios países en desarrollo han señalado que la adopción de un régimen nacional aplicable al control de las fusiones puede ser difícil de prever para determinados gobiernos de países en desarrollo o que lo mejor es adoptar ese régimen en el plano regional. Ésta es una de las razones por las que, en nuestra comunicación presentada en la reunión de abril del Grupo de Trabajo (WT/WGTCP/115), sugerimos que, al definir la cobertura de una legislación sobre competencia, tal vez no sea necesario prever la adopción de un régimen

aplicable al control de las fusiones. También se han expresado preocupaciones acerca de la aplicación de la legislación sobre competencia a empresas pequeñas y medianas. Como lo hemos señalado en comunicaciones anteriores, esas empresas por lo general carecerían de poder de mercado y es poco probable que los acuerdos entre ellas tuvieran una repercusión importante en el comercio internacional. Los principios o normas comunes de la OMC no impedirían, en consecuencia, una aplicación flexible de las disciplinas relativas a la legislación sobre competencia a las empresas pequeñas y medianas. Creemos, por lo tanto, que es posible definir normas y principios comunes de manera flexible y teniendo en cuenta las necesidades en la esfera del desarrollo. Estamos dispuestos, desde luego, a examinar las inquietudes específicas que los países en desarrollo puedan tener en este sentido.

Cooperación: La dimensión del desarrollo de un Acuerdo de la OMC no deberá quedar limitada a las cuestiones referentes a los períodos transitorios y a la flexibilidad de las normas. Se deberá prestar particular atención a asegurarse de que los países en desarrollo puedan derivar los máximos beneficios de las modalidades de la cooperación internacional. Estos países se han referido a menudo en foros internacionales a la necesidad de una cooperación internacional en lo relativo a las prácticas anticompetitivas, incluido el intercambio de experiencias y la cooperación en casos individuales. Un marco multilateral en la OMC debe encarar estas preocupaciones. Una consideración clave para la formulación de principios y normas comunes en la OMC es asegurarse de que todos los países puedan derivar beneficios y participar en modalidades flexibles de cooperación en las que se tengan en cuenta las necesidades de los países en diferentes niveles de desarrollo. En la primera parte de la presente nota, así como en otra comunicación distinta sobre cooperación, se han mencionado los elementos que cabría considerar en este sentido.

Asistencia técnica y fomento de la capacidad: Actualmente se presta una asistencia técnica significativa en la esfera de la competencia tanto a nivel bilateral como por conducto de varias organizaciones internacionales. Al mismo tiempo, se ha señalado que hay grandes posibilidades de que al fomento de la capacidad en lo referente a la adopción de una legislación sobre competencia y su aplicación se le otorgue una mayor prioridad y que también puede mejorar la coordinación de esfuerzos en los que participen plenamente los países en desarrollo. Un Acuerdo de la OMC, que incluya normas y principios comunes, desempeñaría una función catalizadora en el logro de estos objetivos. Por lo tanto, sería importante analizar en la OMC, de forma paralela con el examen de normas comunes, los medios de promover un método mejor coordinado e integrado para la prestación de asistencia técnica sobre la base de la cooperación entre todas las organizaciones internacionales competentes. Una vez que se estableciera un acuerdo, también sería necesario vigilar los progresos realizados al respecto.
